



I

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la comunicación a la Dirección General de Tributos de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a requerimiento de ésta, de la información requerida a la Subdelegación del Gobierno consultante relativa a las comunicaciones de alta y baja desde 2008 en las actividades de comercio o reciclaje de objetos fabricados con metales preciosos, así como la información existente en las Dependencias Policiales de la provincia de los libros registro de tales comerciantes presentada desde el año 2008.

Tal y como expone el escrito de consulta, la Administración Tributaria competente recaba ciertos datos que obran en poder de la Subdelegación del Gobierno por imperativo legal. Por un lado, en desarrollo de la Ley 17/1985 de 1 de junio sobre objetos fabricados con metales preciosos, el artículo 87 del Real Decreto 197/1988 de 22 de febrero dispone: *“Las casas de compraventa, las casas de empeño o préstamo, los Montes de Piedad, y, en general, quienes se dediquen al comercio de objetos usados de oro, plata o platino, con o sin piedras preciosas o perlas finas, deberán comunicar a los Gobernadores Civiles o Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, el comienzo y el cese de sus actividades, cumplir cuantos requisitos exija la legislación vigente para el ejercicio de dichas actividades y figurar dados de alta, en su caso, en el epígrafe o epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal”*. Por otro lado, esa misma norma impone a tales comerciantes la llevanza de *“un libro-registro, foliado y sellado en todas sus hojas por la Jefatura Superior o Comisaría de Policía correspondiente, en el que, por orden correlativo y sin interrupción de continuidad, asentarán todas las operaciones que realicen”* (art. 91), consignando la información que en el mismo precepto se establece. Es ésta la información solicitada por la Administración Tributaria desde el año 2008.

II

En primer lugar debe hacerse referencia al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, ya que no todos los supuestos pueden encontrarse bajo la protección de dicha Ley.

La Ley Orgánica 15/1999 dispone en su artículo 2.1, párrafo primero que *“la presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado”*, siendo datos de carácter personal, conforme al artículo 3.a) *“Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”*.



Esta Agencia ha venido considerando que de dichos preceptos se deduce claramente que la protección conferida por la Ley Orgánica 15/1999 no es aplicable a las personas jurídicas, que no gozarán de ninguna de las garantías en ella establecidas, sin perjuicio de que los Tribunales puedan atender las reclamaciones de responsabilidad que pudieran exigirse en el caso de que el uso de información relativa a las empresas les cause algún perjuicio.

Esta interpretación se plasma expresamente en el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que en su artículo 2.2 establece que *“Este reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas, ni a los ficheros que se limiten a incorporar los datos de las personas físicas que presten sus servicios en aquéllas, consistentes únicamente en su nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.”*

En lo que se refiere a los empresarios individuales, el artículo 2.3 del citado Reglamento dispone que *“Asimismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal.”*

Por consiguiente la Ley Orgánica 15/1999 no resultará de aplicación a las solicitudes de datos de aquellos obligados tributarios que revistan la forma de persona jurídica, ni a los empresarios individuales cuando los tratamientos se refieran a ellos en su condición de comerciante, industrial o naviero, debiendo, en cambio, sujetarse a las previsiones de dicha norma los restantes supuestos.

III

En la medida en que los datos requeridos excedan de los propios de los comerciantes en el ejercicio de su actividad, como parece ser el supuesto de hecho contemplado, al referirse la consulta al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que se devenga cuando el transmitente no es un empresario o profesional que actúe en el ejercicio de una actividad empresarial o profesional, y encontrarnos por tanto ante datos personales de personas físicas que no actúan en su condición de comerciantes, debemos estudiar la incidencia de la LOPD en el supuesto de hecho que nos ocupa.

Pues bien, un caso prácticamente idéntico, en el que los datos de quienes se dedicaran a la compraventa de oro, metales preciosos y joyas a particulares eran solicitados por la administración tributaria a la Policía Nacional fue ya resuelto en informe de esta Agencia de 25 de junio de 2009 dando una respuesta afirmativa a la solicitud de información, en los siguientes términos:



“La transmisión de los datos así planteada constituye una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

Respecto de las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, será posible la comunicación cuando la misma se encuentre amparada en una norma con rango de Ley, tal y como dispone el artículo 11.2 a) de la propia Ley Orgánica.

Dicho lo anterior, el artículo 93.1 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, dispone que “las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, así como las entidades mencionadas en el apartado 4 del artículo 35 de esta Ley, estarán obligadas a proporcionar a la Administración tributaria toda clase de datos, informes, antecedentes y justificantes con trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de sus propias obligaciones tributarias o deducidos de sus relaciones económicas, profesionales o financieras con otras personas”.(..)

2. Las obligaciones a las que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse con carácter general en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen, o mediante requerimiento individualizado de la Administración tributaria que podrá efectuarse en cualquier momento posterior a la realización de las operaciones relacionadas con los datos o antecedentes requeridos.(..)”

Por su parte el artículo 94 del mismo texto legal determina las autoridades sometidas al deber de informar y colaborar, señalando que “1.Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales; los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas, incluidas las gestoras de la Seguridad Social y quienes, en general, ejerzan funciones públicas, estarán obligados a suministrar a la Administración tributaria cuantos datos, informes y antecedentes con trascendencia tributaria recabe ésta mediante disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos, y a prestarle, a ella y a sus agentes, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, participarán en la gestión o exacción de los tributos mediante las advertencias, repercusiones y retenciones, documentales o pecuniarias, de acuerdo con lo previsto en las leyes o disposiciones reglamentarias vigentes.(...)



Los órganos de la Administración tributaria podrán utilizar la información suministrada para la regularización de la situación tributaria de los obligados en el curso del procedimiento de comprobación o de inspección, sin que sea necesario efectuar el requerimiento al que se refiere el apartado 3 del artículo anterior.

5. La cesión de datos de carácter personal que se deba efectuar a la Administración tributaria conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, en los apartados anteriores de este artículo o en otra norma de rango legal, no requerirá el consentimiento del afectado. En este ámbito no será de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre (RCL 1999, 3058) , de Protección de Datos de Carácter Personal.”

De los preceptos transcritos se desprende la existencia de un deber de colaboración con la Administración Tributaria, que implicará, la comunicación de los datos que revistan trascendencia tributaria y sean necesarios para el ejercicio por dicha Administración de las potestades que la Ley le atribuye. Este deber bastará para considerar lícita la cesión la aplicación del artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con los artículos 93 de la Ley General Tributaria.

En todo caso, como cabe apreciar de los citados preceptos, la información que habrá de facilitarse será necesariamente la que revista “trascendencia tributaria”, por ser ésta la precisa para el ejercicio de dichas potestades. En este sentido, los preceptos deben cohererse con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, según el cual “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”.

De ello se desprende que los datos que habrán de facilitarse deberán ser los que resulten “adecuados, pertinentes y no excesivos” en relación con el ejercicio de las potestades tributarias.

Teniendo en cuenta que en el supuesto sometido a informe los informes solicitados por la Agencia Tributaria, se concretan respecto de quienes se dediquen asiduamente a la compraventa de oro, metales preciosos y joyas a particulares, todo ello, dentro del marco de una investigación relativa a las “Actividades Económicas, D.-Compraventa de Oro”, al tratarse de datos relacionados con la compra de oro y joyas, cuya venta implica la realización de determinados pagos, éstos tienen trascendencia tributaria, y por ello, resulta preciso conocer los datos requeridos por la Agencia Tributaria.



En consecuencia cabe concluir que el requerimiento efectuado y la consiguiente cesión de los datos se encuentra amparada por lo establecido en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria”.

Siendo el caso presente idéntico, deberá darse la misma respuesta afirmativa, siendo por tanto una cesión de datos amparada en el art. 11.2.a) LOPD en relación con los artículos 93 y 94 de la Ley General Tributaria, en la medida en que sean datos de trascendencia tributaria.